TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 1112/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado San Juan de Avilés y Puentes, Municipio de Aramberri, N.L.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 1112/93, que corresponde al expediente número 1661, relativo a la ampliación de ejido, del poblado denominado "San Juan de Avilés", ubicado en el Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo número D.A. 7283/98, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de cinco de enero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veintidós de noviembre del mismo año, se concedió al poblado "San Juan de Avilés y Puentes", Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León, una superficie total de 5,416-00-00 (cinco mil cuatrocientas dieciséis hectáreas) por concepto de dotación de tierras, ejecutándose en forma total, el veintiocho de septiembre del referido año.

SEGUNDO.- Por escrito de quince de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, un grupo de campesinos del núcleo agrario referido, solicitó al Gobernador del Estado ampliación de ejido, documento que obra a fojas de la 4 a la 6 del legajo I del expediente.

TERCERO.- El trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete, la Comisión Agraria Mixta instauró el expediente respectivo registrándolo bajo el número 1661. La publicación de la solicitud fue realizada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete.

El Comité Particular Ejecutivo, quedó integrado por Félix Arias García, Miguel Ortiz Medrano y Octaviano Loera Arias, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, habiéndose expedido los nombramientos correspondientes el quince de mayo de mil novecientos ochenta y siete, con oficios B-329/87, B-330/87 y B-331/87.

CUARTO.- El primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos la Comisión Agraria Mixta ordenó al personal de su adscripción, realizar la investigación correspondiente al aprovechamiento de los terrenos concedidos al poblado gestor por concepto de dotación de tierras, así como el levantamiento del censo agrario. Del informe rendido el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, se desprende que los terrenos investigados se encuentran totalmente aprovechados y que la diligencia censal arrojó un resultado de cuatrocientos ochenta habitantes de los cuales sesenta y cinco, tienen capacidad en materia agraria.

Por lo que respecta a los trabajos técnicos e informativos, la Comisión Agraria Mixta mediante oficio 00560 de once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, destacó personal para efectuarlos. Del informe rendido el veintitrés de octubre del mismo año, se conoce que las notificaciones a los propietarios de los predios situados dentro del radio de afectación correspondiente, se llevaron a cabo mediante los oficios 539, 540 y 541 del siete de septiembre de mil novecientos noventa y dos, de conformidad con las constancias que obran en autos a fojas 59, 66 y 72 del expediente. Asimismo, dentro del radio legal de afectación se desprende que se encuentran los ejidos denominados "San Joaquín", "Sandía y La Victoria", "Cedritos", "San José del Sitio", "La Trinidad" y "San Juan de Avilés y Fuentes", además se encontraron los predios: "La Vega del Lobo" con superficie de 2,592-49-45 (dos mil quinientas noventa y dos hectáreas, cuarenta y nueve áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de agostadero de mala calidad, propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza; "El Jocoque", con superficie de 151-49-30 (ciento cincuenta y una hectáreas, cuarenta y nueve áreas treinta centiáreas) de agostadero de mala calidad, propiedad de la Nación; y otro innominado, con superficie de 320-90-45 (trescientas veinte hectáreas, noventa áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de agostadero de mala calidad, propiedad de la Nación; terrenos que en el momento de realizarse la inspección reglamentaria se encontraron sin ningún tipo de explotación por más de dos años consecutivos, habiéndose levantado las actas circunstanciadas del veintidós, veintitrés y veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, para hacer constar este hecho, documentos que obran a fojas 63, 70 y 76 del legajo I del expediente.

Resulta conveniente señalar que mediante certificaciones de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Cuarto Distrito, con residencia en Ciudad Arroyo, Nuevo León, se advierte que el predio denominado "La Vega del Lobo" es propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza, de conformidad con la inscripción 86, volumen 37, libro 2, sección I, unidad Aramberri, del trece de diciembre de mil novecientos noventa, y en lo que respecta a los predios "El Jocoque" y otro innominado que supuestamente pertenecían a Petronilo J. Martínez y José Castillo Morales, el mencionado Registro inmobiliario informó que no se encontró ninguna inscripción relativa a esas fincas a nombre de persona alguna, documento que obra a foja 71 del legajo uno del expediente.

QUINTO.- El doce de febrero de mil novecientos noventa y tres, la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen en sentido positivo, proponiendo conceder al poblado gestor, una superficie de 3,064-89-20 (tres mil sesenta y cuatro hectáreas, ochenta y nueve áreas, veinte centiáreas) de agostadero de mala calidad, de las cuales 2,592-49-45 (dos mil quinientas noventa y dos hectáreas, cuarenta y nueve áreas, cuarenta y cinco centiáreas) corresponden al predio "La Vega del Lobo", propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza, 151-49-30 (ciento cincuenta y una hectáreas, cuarenta y nueve áreas, treinta centiáreas) al predio "El Jocoque", propiedad de la Nación y 320-90-45 (trescientas veinte hectáreas, noventa áreas, cuarenta y cinco centiáreas) al predio innominado, propiedad de la Nación.

SEXTO.- El Gobernador del Estado de Nuevo León, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, emitió mandamiento en sentido positivo, concediendo al poblado mencionado, una superficie de 3,064-89-20 (tres mil sesenta y cuatro hectáreas, ochenta y nueve áreas, veinte centiáreas) de agostadero de mala calidad, en los términos del dictamen emitido por la Comisión Agraria Mixta.

SEPTIMO.- Por su parte el Delegado Agrario en el Estado, formuló su opinión el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y tres, proponiendo confirmar el mandamiento del Gobernador del Estado.

OCTAVO.- Obra en autos el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario en sentido positivo, de dos de junio de mil novecientos noventa y tres.

NOVENO.- Por auto de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado en este Tribunal Superior el expediente a que se hace mérito, habiéndose registrado bajo el número 1112/93, notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria.

DECIMO.- Este Tribunal Superior dictó sentencia el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres concediendo al poblado denominando "San Juan de Avilés y Puentes", ubicado en el Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León, una superficie de 3,064-89-20 (tres mil sesenta y cuatro hectáreas, ochenta y nueve áreas, veinte centiáreas), que se tomarían de la siguiente manera; 2,592-49-45 (dos mil quinientas noventa y dos hectáreas, cuarenta y nueve áreas, cuarenta y cinco centiáreas) corresponden al predio "La Vega del Lobo", propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza, 151-49-30 (ciento cincuenta y una hectáreas, cuarenta y nueve áreas, treinta centiáreas) al predio "El Jocoque", propiedad de la Nación y 320-90-45 (trescientas veinte hectáreas, noventa áreas, cuarenta y cinco centiáreas) al predio innominado, propiedad de la Nación.

DECIMO PRIMERO.- En contra de la sentencia anterior Carlota Avilés de Mendoza interpuso juicio de amparo del que tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito con residencia en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, el cual quedó radicado bajo el número 532/95. El órgano jurisdiccional federal de referencia dictó sentencia el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, concediendo la protección de la justicia federal a la quejosa. En contra de dicha resolución el Tribunal Superior Agrario interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, radicándose bajo el número 105/96. El tribunal aludido pronunció sentencia el doce de agosto de mil novecientos noventa y seis confirmando la resolución del Juez de Distrito citado, para el efecto de dejar insubsistente la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres y pronunciar otra sentencia en la que considerara el informe rendido por el ingeniero José María Dávila Flores.

DECIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria en comento, este Tribunal Superior dictó Acuerdo Plenario por el que declaró parcialmente insubsistente la sentencia de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, quedando firme el otorgamiento de 472-39-75 (cuatrocientas setenta y dos hectáreas, treinta y nueve áreas, setenta y cinco centiáreas). Asimismo, pronunció nueva resolución el nueve de enero de mil

novecientos noventa y ocho, concediendo al poblado de referencia, por concepto de ampliación de ejido, una superficie de 2,592-49-45 (dos mil quinientas noventa y dos hectáreas, cuarenta y nueve áreas, cuarenta y cinco centiáreas) que se tomarían del predio denominado "La Vega del Lobo", propiedad de la quejosa.

DECIMO TERCERO.- En contra de la sentencia anterior Carlota Amelia Avilés Mendoza, promovió juicio de garantías del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándose bajo el número D.A.-7283/98. Dicho órgano jurisdiccional dictó resolución el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, otorgando la protección de la justicia federal a la quejosa de conformidad con las siguientes consideraciones esenciales:

"En el séptimo concepto de violación, la parte quejosa se duele de que la sentencia reclamada se basa en estudios técnicos respecto de los cuales no se le otorgó la garantía de audiencia, ya que tales trabajos no se realizaron ante su presencia.- Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el concepto de violación antes señalado.- Una revisión del legajo I de pruebas revela los siguientes hechos. a.- (transcribe).- b.- A fojas 59 del legajo I de pruebas, consta el oficio 00541 de siete de septiembre de mil novecientos noventa y dos, dirigido a la C. Amelia Avilés Mendoza, en su calidad de propietaria del predio "La Vega del Lobo", en el que consta el siguiente texto: (transcribe).- c.- En el transcrito oficio no obra constancia alguna de que la quejosa efectivamente haya sido notificada del documento de mérito.- d.- A fojas 60 del legajo I de pruebas, obra un oficio sin número que es del tenor literal siguiente: (transcribe).- Como se observa de los oficios transcritos, no queda fehacientemente acreditado que la parte quejosa efectivamente haya sido solicitada para presenciar la realización de los trabajos técnicos.- Consecuentemente, la falta de prueba contundente que demuestra que la quejosa fue informada de la fecha y hora fijadas para la realización de los trabajos técnicos informativos, tal y como se obtiene de las pruebas documentales visibles a fojas 59 y 60 del legajo I de pruebas antes transcritas, hace necesario conceder el amparo solicitado.- La conclusión a la que ha llegado este Tribunal, se robustece con la transcripción que se realiza de las actas visibles a fojas 61, 62 y 63 del legajo I de pruebas, en las que se hizo constar lo siguiente: (transcribe.- Las aludidas actas de diecisiete y veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y dos, contradicen el dicho del comisionado Roberto Alejandro Leal, citado en el informe rendido por el mismo, conforme al cual la hoy quejosa, Carlota Amelia Avilés Mendoza quedó debidamente notificada de la realización de los trabajos técnicos informativos ordenados por la Comisión Agraria Mixta (antecedente 5 del caso que nos ocupa).- En consecuencia, con la citada omisión se impidió que la hoy quejosa presenciara la realización de la diligencia, así como el que tuviera oportunidad de hacer las observaciones pertinentes en relación al resultado de los trabajos técnicos informativos y presentar los alegatos y pruebas que estime conveniente, conforme a lo previsto por los artículos 14 constitucional y 286, 288 y 297 de la Ley Federal de Reforma Agraria.- Luego entonces, el acta levantada durante la realización de los trabajos técnicos informativos no es suficiente para motivar el fallo reclamado, en la medida en la que impidió a la quejosa formular una adecuada defensa de sus intereses".

Con base en lo anterior, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, "para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y se reponga el procedimiento respectivo, a efecto de que se emplace conforme a derecho a la parte quejosa respecto de la realización de los trabajos técnicos informativos y, en base a los mismos, la autoridad competente determine con certidumbre si las tierras que defiende la peticionaria de garantías se ajustan o no a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria".

DECIMO CUARTO.- En cumplimiento a la ejecutoria a que se hace mérito el pleno de este Tribunal Superior, dictó acuerdo el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dejando insubsistente la sentencia reclamada y ordenó turnar los autos al Magistrado Ponente.

DECIMO QUINTO.- En cumplimiento a la citada ejecutoria el Magistrado Instructor dictó acuerdo el siete de febrero del año dos mil con el propósito de que se emplazara a la quejosa y ante su presencia se procediera a la realización de los trabajos técnicos informativos. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, procedió a diligenciar el despacho correspondiente y una vez cumplimentado envió las constancias correspondientes a este Tribunal Superior, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La presente resolución se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo número D.A.7283/98.

TERCERO.- La capacidad jurídica del grupo gestor ha quedado demostrada conforme a los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en atención a que el censo arrojó un total de 65 (sesenta y cinco) capacitados, transcribiéndose al efecto los nombres correspondientes: 1.- Cipriano Arias Loera, 2.- Bernardino García García, 3.- Francisco Castillo Rodríguez, 4.- Francisco Arias García, 5.- Paciano Alemán Loera, 6.- Tomás Loera Rojas, 7.- Félix García Arias, 8.- Santiago Muñoz Lizcano, 9.- Cástulo Hernández Cruz, 10.- Luis Loera Rivera, 11.- Octaviano Loera Arias, 12.- Mateo Obregón Martínez, 13.- Primitivo Torres Medina, 14.- Jacinto Castro García, 15.- Sabás Castro García, 16.- Hilario Rivera Martínez, 17.- Hilario Luna Ramírez, 18.- Refugio Castro Pérez, 19.- Salvador Obregón Vásquez, 20.- Francisco Torres Loera, 21.- Santos Rivera Carranza, 22.- Crisanta Loera Rivera, 23.- Francisco Obregón Bernal, 24.- Cesáreo Loera Rivera, 25.- Santiago Aguilar Galindo, 26.- Sergio García Soto, 27.- Luis García Soto, 28.- Margarito Castro Martínez, 29.- Florentino Obregón Lizcano, 30.- Armando Castro Obregón, 31.- Esteban García Muñoz, 32.- Anselmo Ortiz Montañez, 33.- Jesús Martínez Ortiz, 34.- Vicente Rivera Galindo, 35.- Concepción Castro Pérez, 36.- Felipe Arias Loera, 37.- Pablo Rodríguez Arreozola, 38.- Román Loera López, 39.- Miguel Ortiz Medrano, 40.- Abraham Montoya Rodríguez, 41.- Juan Avilés Gasca, 42.- Antonio Hernández Sandoval, 43.- Salvador Montero Vásquez, 44.- Felipe Martínez Ortiz, 45.- Federico Torres Loera, 46.- Cirilo Castro García, 47.- Roberto Loera Rivera, 48.- Santiago Vásquez Arias, 49.- Petronilo Aguilar Montero, 50.- Fernando Ortiz Rojas, 51.- Petra Torres Medina, 52.- Juan Arias Vásquez, 53.- Hilario Aguilar Galindo, 54.- Aurora Arias García, 55.- Arturo Gámez Calderón, 56.- Eva Arias Loera, 57.- Fidel Rodríguez Ruiz, 58.- Epifania Rodríguez Ramírez, 59.- Isidro Hernández Castillo, 60.- Ignacio Obregón Castro, 61.- Toribia Loera Rivera, 62.- Felipe Martínez Guerrero, 63.- Rito Bernal Castañón, 64.- Ramón Ortiz Medrano y 65.- Juan Rivera Guerrero.

CUARTO.- El requisito de procedibilidad establecido por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ha quedado plenamente satisfecho, en virtud de que los predios concedidos en dotación al núcleo de que se trata, fueron encontrados totalmente aprovechados.

QUINTO.- Consta en las actuaciones del expediente en estudio, que el procedimiento se ajustó plenamente a lo señalado por los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 288, 291, 292, 298, 299, 300, y 304 en relación con el tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 constitucional, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

SEXTO.- De conformidad con el thema decidendum, señalado por la ejecutoria que se cumplimenta, se procede a analizar los trabajos técnicos informativos que se ordenaron mediante acuerdo de siete de febrero del año dos mil, los cuales fueron realizados por los peritos topógrafos Sixto Avila Tronco y Pedro Linares Méndez, actuando conjuntamente con el actuario ejecutor del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, Germán Espinoza Hernández, así como las diversas constancias que obran en autos.

En este contexto, se advierte que Carlota Amelia Avilés Mendoza fue emplazada personalmente, al tiempo que concurrió a la realización de los trabajos técnicos e informativos, tal y como se observa del acta circunstanciada de dieciséis de junio del año dos mil.

Por otro lado la beneficiaria de garantías, Carlota Amelia Avilés Mendoza, presentó escrito ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, aportando diversas probanzas, las cuales fueron recibidas por el Tribunal Unitario Agrario de referencia, el tres de julio de los corrientes.

Asimismo, de las constancias remitidas obra el acta de inspección de veintinueve de junio del año dos mil, signada por el actuario ejecutor Germán Espinosa Hernández, así como por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "San Juan de Avilés y Puentes", e igualmente por Carlota Amelia Avilés Mendoza.

Al efecto se transcribe el contenido del acta correspondiente:

“En el poblado de San Juan Avilés y Puentes, Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León, siendo las diez horas del día veintinueve de junio del dos mil, constituidos el C. Lic. Germán Espinosa Hernández, actuario ejecutor, los Ings. Sixto Avila Tronco y Ing. Pedro Linares Méndez, en la casa ejidal lugar y hora señalada para llevar a cabo la encomienda ordenado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 20, con sede en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, y en cumplimiento del auto de fecha siete de febrero del año en curso, emitido por el Tribunal Superior Agrario dentro del juicio agrario citado al rubro, despacho D-05 100 relacionado con la ejecutoria de amparo del tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito número D-A-7283/98, dentro del juicio agrario al rubro citado, para llevar a cabo los trabajos técnicos informativos, tendientes a demostrar la hipótesis prevista por el numeral 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en el predio “La Vega del Lobo”; así como la C. Carlota Amelia Avilés Mendoza, identificándose con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto federal Electoral con número de folio 034119138 y clave electoral AVNMNCR 24052919 M 700, así como los integrantes del comisariado ejidal del poblado citado al rubro los CC. Cesáreo Loera Rivera, Francisco Arias García y Miguel Ortiz Medrano, identificándose con credenciales para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal electoral con número de folios 34567124, 34567462, 34567263, y claves de lector LRRVCS33082719H100, ARGFR45012419H600 ORMONG 3705081911900, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente; acto segundo se procedió a nuestra diligencia y nos trasladamos al punto denominado “La Arana”, el cual se encuentra de la casa ejidal con un rumbo sureste; en este acto la C. Carlota Amelia Avilés Mendoza, le manifiesta al suscrito que no puede acompañarnos dentro de la inspección ocular por su incapacidad, por no poder caminar y autorizando para poder llevar la diligencia encomendada; dentro del acuerdo encomendado, de la cual se observó dos tanque para almacenar agua en cual fue hecho por el Gobierno del Estado, que aproximadamente tienen entre ocho y doce años, encontrando también caballos, burros, vacas, cabritos, dispersados por todo el predio y encontrando un pastor y preguntándole de quién era el dueño de los cabritos y preguntarle cómo se llama, contestando que se llama Emigdio Arias Obregón, y que los dueños son: Miguel Ortiz Medrano, José Angel García Soto, Valeriano Castro Guerrero y Juan Avilés Gasca de los cuales se contó cuatrocientos cabritos aproximadamente, encontrando reses cincuenta aproximadamente, caballos treinta y cinco aproximadamente, sesenta burros aproximadamente, encontrando también excremento fresco de dichos animales, por parte del terreno, es de agostadero de mala calidad, en virtud de las eventualidades de las lluvias de la región y de las especies vegetales que cubren dichos terrenos que son de baja calidad como gran tamaño y yerbas de la región el cual se encontró explotado por el ejido de San Juan Avilés y Puentes y en ésta se le da la voz a la c. Carlota Amelia Avilés Mendoza, y manifestando al suscrito, ratificando que en ningún momento he dejado al estar pendiente de mí terreno, y si estoy en Monterrey, ha sido por causa mayor, la enfermedad de mi tía la cual depende de mí y de mis enfermedades repitiendo por causa de fuerza mayor, mi ganado estuvo perdiendo lo cual me obligó a terminar con él. A su dicho constó, además mi casa materna la abrieron los ejidatarios de la cual lo puedo probar, porque estuvieron presos por ese delito, a su dicho conste.- Es todo lo que tiene que agregar y dando la voz a los ejidatarios y tomando la voz por ellos el C. Esteban García Muñoz, manifestó que después de muchos años de estar en posesión dicho predio, pedimos que sean resueltos los problemas que tanto nos aquejan en nuestra comunidad y nuestras familias, ya que estamos en posesión de este predio explotando durante mucho tiempo sacando leña y pastando ganado lo cual comprobaremos con el Registro del Fierro o marca de los animales, asimismo con la manifestación de nuestros colindantes, también sacamos abono vegetal, es todo lo que tenemos que agregar, se cierra la presente acta siendo las diez treinta horas del día primero de julio del año dos mil en la casa ejidal, firmando en ella los que intervinieron, para todos los efectos legales. DOY FE”.

Asimismo, obra el oficio de catorce de julio del año dos mil, expedido por la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, por el que el Gerente de dicha Unión hace constar que Carlota Amelia Avilés Mendoza no tiene registro de fierro o señal en el libro que corresponde a dicho Municipio.

Por otro lado, de los trabajos técnicos e informativos remitidos por el Tribunal Unitario Agrario se sabe que “se prosiguió con el cálculo de la orientación astronómica, cálculo de la poligonal del predio, la cual arrojó una superficie de 2,812-43-22,37 hectáreas”. Dicho cálculo se encuentra signado por el actuario ejecutor, Germán Espinosa Hernández, así como por los peritos topógrafos Sixto Avila Tronco y Pedro Linares Méndez. De lo anterior se infiere que los trabajos ordenados por la ejecutoria, precisan la superficie analítica del predio en comento.

En lo referente al escrito de Carlota Amelia Avilés Mendoza en el que señaló y aportó conjuntamente diversos medios de prueba, se procede a efectuar el análisis de las mismas.

Resulta conveniente precisar que la citada señora Avilés Mendoza adjuntó a su escrito exclusivamente probanzas documentales.

Entre las mencionadas y aportadas se encuentra el certificado de libertad de gravámenes de catorce de junio del año dos mil, expedido por el Registro Inmobiliario de Monterrey, Nuevo León, del que se desprende la inexistencia de gravámenes respecto del predio propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza. La documental de referencia se cataloga como pública, en virtud de haber sido expedida por servidor público, de conformidad con lo preceptuado por los numerales 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria en la especie, de acuerdo a lo señalado por el artículo 167 de la Ley Agraria, confiriéndosele valor probatorio pleno en atención a lo dispuesto por el numeral 202 del citado ordenamiento adjetivo. Con la documental a que se hace mérito, Carlota Amelia Avilés Mendoza comprueba que existe una inscripción en el Registro Inmobiliario de Monterrey, Nuevo León, que la acredita como propietaria del inmueble correspondiente, al tiempo que se deduce la libertad de gravámenes del predio en comento.

En lo atinente a las documentales privadas relativas a las constancias originales expedidas por el médico Mario Alberto Garza, ambas de catorce de junio del año dos mil, se les confiere dicho carácter atento a lo dispuesto por los numerales 133, 136 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable de manera supletoria en la especie de acuerdo a lo señalado por el artículo 167 de la Ley Agraria, otorgándosele valor probatorio para acreditar el hecho contenido en los mismos, de conformidad con lo contemplado por los numerales 204 y 205 del ordenamiento instrumental referido. Con las documentales privadas aludidas, Carlota Amelia Avilés Mendoza, comprueba el precario estado de salud de ella misma, así como el de Julia Mendoza Obregón quien es su progenitora.

Asimismo, acompañó en fotostáticas simples los pagos anuales por concepto de impuesto predial del inmueble a que se hace mérito correspondientes a los años de mil novecientos ochenta y seis hasta mil novecientos noventa y tres. En virtud de que se trata de fotostáticas simples sin ninguna certificación o cotejo por autoridad competente o por notario público, no son de tomarse en cuenta, de conformidad con la tesis de jurisprudencia VI. 2o.J/216 correspondiente a la octava época, localizable en el volumen correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 58, octubre de 1992, página 55 que al efecto se transcribe:

COPIA FOTOSTATICA SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.

Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo.

En lo inherente a los oficios emitidos por el licenciado Raúl Guerra Montemayor, en ese entonces Subdelegado de Procedimientos y Controversias de la Secretaría de la Reforma Agraria, se advierte que los mismos se presentaron en fotostática simple, razón por la cual no son de tomarse en cuenta atento a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia citada en el párrafo precedente.

Por lo que corresponde a la documental consistente en el oficio 5780 de dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, suscrito por el licenciado Mario Luis Guzmán Rodríguez, entonces Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, se advierte que el documento se presentó en fotostática simple, razón por la cual no es de tomarse en cuenta atento a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia citada en el párrafo anterior.

De lo anterior puede derivarse que, con las documentales aludidas Carlota Amelia Avilés Mendoza no desvirtúa la causal de in explotación contemplada en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

No obstante, también aportó copia certificada de la denuncia formulada por la multicitada señora Avilés Mendoza de dos de julio de mil novecientos noventa y dos, ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, respecto de los delitos de despojo y daño en propiedad ajena en contra de Efrén Obregón García, Federico Torres Loera y Octaviano Loera Arias, (integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "San Juan de Avilés y Puentes").

Asimismo, acompañó la resolución de veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis pronunciada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en la cual se absolvió de los delitos de despojo de inmueble y daño en propiedad ajena a las personas referidas en el párrafo anterior.

A las documentales precedentes se les cataloga como documentales públicas de conformidad con lo preceptuado por los numerales 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, confiriéndoseles valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del referido ordenamiento.

Se desprende de la resolución en comento que: "en autos no se acreditó esa posesión del inmueble descrito que en su favor refiere la querellante..." "según la versión de los encausados, el de nombre Efrén Obregón García recibió la posesión del inmueble que reclama la querellante Carlota Amelia Avilés Mendoza, de parte de sus co-procesados, argumentando tales procesados que lo anterior obedecía al acuerdo tomado en asamblea ejidal" "luego entonces, no resulta cierto que tales procesados de propia autoridad hayan ocupado el inmueble de que se duele Carlota Amelia Avilés Mendoza".

De acuerdo con la transcripción anterior, se colige que desde el año de mil novecientos noventa y dos, la multirreferida Carlota Amelia Avilés Mendoza, formuló denuncia por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, directamente en contra de los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "San Juan de Avilés y Puentes", quienes se adentraron en el inmueble referido y desde entonces se encuentran en posesión del mismo, al igual que los campesinos del poblado citado. Esta circunstancia se corrobora con el documento que se analiza, así como por el acta circunstanciada de la inspección ocular de veintinueve de junio del año dos mil, que se realizó en el inmueble denominado "La Vega del Lobo", "el cual se encontró explotado por el ejido "San Juan de Avilés y Puentes".... "y tomando la voz por ellos el C. Esteban García Muñoz, manifestó que después de muchos años de estar en posesión de dicho predio".

En este orden de ideas resulta concluyente que Carlota Amelia Avilés Mendoza, desde julio de mil novecientos noventa y dos, se ha encontrado impedida para llevar a cabo la explotación del predio aludido, ya que no detenta la posesión del mismo debido a la intromisión de los campesinos del poblado "San Juan de Avilés y Puentes", circunstancia que configura en la especie una causa de fuerza mayor y que se amolda a la hipótesis descrita en la segunda parte del numeral 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria que al efecto establece:

"Para conservar la calidad de inafectable, la propiedad agrícola o ganadera no podrá permanecer sin explotación por más de dos años consecutivos, a menos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan transitoriamente, ya sea en forma parcial o total. Lo dispuesto en este artículo no impide la aplicación, en su caso, de la Ley de Tierras Ociosas y demás leyes relativas".

En efecto, la ocupación que los campesinos tienen desde julio de mil novecientos noventa y dos, fecha en la que Carlota Amelia Avilés Mendoza formuló la denuncia correspondiente por la invasión que en su concepto sufrió el terreno correspondiente, deviene en una causa de fuerza mayor que le ha impedido hasta la fecha encontrarse en aptitud de efectuar la explotación del inmueble multicitado, lo que se corroboró con el acta de inspección ocular fechada el veintinueve de junio de los corrientes, cuya parte relativa quedó precisada en la líneas anteriores.

En este orden de ideas y al haberse concluido de conformidad con las consideraciones anteriores que Carlota Avilés Mendoza, se encontraba impedida por una circunstancia de fuerza mayor para llevar a cabo la explotación del inmueble denominado "La Vega del Lobo", lo procedente es estimar inafectable dicha propiedad en la parte correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Ahora bien se deriva que el inmueble en comento arrojó una superficie analítica de 2,812-43-22.37 (dos mil ochocientas doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, veintidós centiáreas, treinta y siete miliáreas), de conformidad con el documento suscrito por el actuario executor licenciado Germán Espinosa Hernández, adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, así como por los peritos topógrafos, ingenieros Sixto Avila Tronco y Pedro Linares Méndez, de seis de julio del año dos mil, el cual quedó relacionado en el considerando sexto de la presente resolución.

Ahora bien el artículo 27 constitucional, fracción XV establece que se considerarán como pequeñas propiedades aquellas que no excedan por individuo, de 100-00-00 (cien hectáreas,) de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Asimismo previene que: "Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos".

De igual forma los numerales 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria aplicable en la especie, contemplan iguales supuestos jurídicos.

Por otro lado, dentro de las probanzas presentadas por Carlota Amelia Avilés Mendoza, se advierte que adjuntó copia fotostática certificada de la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el juicio de amparo en revisión número 532/95, de doce de agosto de mil novecientos noventa y seis. La documental de referencia se cataloga como pública, en virtud de haber sido expedida por servidor público, de conformidad con lo preceptuado por los numerales 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria en la especie, de acuerdo a lo señalado por el artículo 167 de la Ley Agraria confiriéndosele valor probatorio pleno en atención a lo dispuesto por el numeral 202 del citado ordenamiento adjetivo. Con la documental de mérito Carlota Amelia Avilés Mendoza acredita que se el Tribunal Colegiado de referencia, modificó la sentencia del Juzgado y declaró fundado el concepto de violación en el que la quejosa alegó falta de motivación consistente en que debió habersele respetado una superficie de 800-00-00 (ochocientas hectáreas) en concepto de pequeña propiedad. En efecto, la parte correspondiente de la sentencia mencionada precisa que: "se impone considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, ya que los mismos resultan fundados. Así es, como quedó de manifiesto en párrafos anteriores, la quejosa argumenta en esencia como concepto de violación que una vez tramitada la solicitud de ampliación de ejido San Juan de Avilés y Puente, elaborados los trabajos técnicos y emitidos los dictámenes, se declaró procedente la petición; empero, que al dictarse la resolución por el Tribunal Superior Agrario que afectó una totalidad de 2595-49-45 hectáreas de agostadero de mala calidad, por haber permanecido sin explotación por más de dos años consecutivos, sin que se le respetaran las ochocientas hectáreas que como pequeña propiedad marca la Ley Agraria anterior. El anterior concepto de violación resulta fundado... no obstante que en la inspección se consideró como probable afectación 220 hectáreas de agostadero, susceptibles de cultivo y 1585 hectáreas de agostadero árido, que hacían un total de 1805 hectáreas, descontando las 800 hectáreas consideradas como pequeña propiedad, al concluir el tribunal responsable declaró afectable, como acertadamente aduce la quejosa, la casi totalidad del predio, es decir, se dejaron a salvo menos de diez hectáreas en inobservancia de los trabajos realizados... por lo que resulta ilegal el acto reclamado, únicamente por lo que hace a este aspecto.

Como se desprende de la anterior transcripción, la quejosa adujo dentro de uno de los conceptos de violación que se le debieron respetar 800-00-00 (ochocientas hectáreas) en concepto de pequeña propiedad, de conformidad con los límites superficiales que establecían los ordenamientos agrarios, argumento que fue declarado fundado por el Tribunal resolutor. Conforme a este contexto, se deduce que Carlota Amelia Avilés Mendoza, solicitó expresamente que se le respetara dicha superficie, al tiempo que se estimó fundado el referido concepto de violación.

De lo anterior se deduce que Carlota Amelia Avilés Mendoza, tiene derecho a que se le respete por concepto de pequeña propiedad, una superficie equivalente a 800-00-00 (ochocientas hectáreas,) por tratarse de terrenos áridos de agostadero, atento a lo dispuesto por los preceptos constitucionales y legales previamente transcritos.

Por lo tanto y tomando en cuenta que la superficie analítica precisada con anterioridad en el considerando sexto de la presente resolución, arrojó un total de 2,812-43-22.37 (dos mil ochocientas doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, veintidós centiáreas, treinta y siete miliáreas), y descontando las 800-00-00 (ochocientas hectáreas), que se respetaron a Carlota Amelia Avilés Mendoza, se concede al poblado denominado "San Juan de Avilés y Puentes", ubicado en el Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León, un total de 2,012-43-22.37 (dos mil doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, veintidós centiáreas, treinta y siete miliáreas), por concepto de ampliación de ejido. Esta superficie pasará a ser propiedad del núcleo beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres y en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

Por lo anterior, es procedente modificar el mandamiento emitido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el siete de mayo del mismo año.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- La presente resolución se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo número D.A. 7283/98.

SEGUNDO.- Es procedente la ampliación de ejido, formulada por un grupo de campesinos del poblado denominado "San Juan de Avilés y Puentes", Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León.

TERCERO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo anterior, con 2,012-43-22.37 (dos mil doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, veintidós centiáreas, treinta y siete miliáreas) de agostadero de mala calidad, por concepto de ampliación de ejido, que se tomarán del predio denominado "La Vega del Lobo", propiedad de Carlota Amelia Avilés Mendoza, y que resultan afectables en términos de lo dispuesto por la fracción XV del artículo 27 constitucional, así como por los numerales 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por exceder los límites de la pequeña propiedad, de conformidad con el plano proyecto que al efecto se realice. Esta superficie pasará a ser propiedad del núcleo beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

CUARTO.- Se modifica el mandamiento del Gobernador del Estado de Nuevo León, emitido el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el siete de mayo del mismo año.

QUINTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

SEXTO.- Notifíquese al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto del juicio de amparo D.A. 7283/98, a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Nuevo León, a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Dirección de Colonias y Terrenos Nacionales dependiente de la Dirección General de Procedimientos Agrarios y a la Procuraduría Agraria; ejecútense y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

El C. Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, licenciado **Humberto Jesús Quintana Miranda**, que suscribe, CERTIFICA: Que las copias que anteceden, son fiel reproducción de sus originales que obran en el juicio agrario número 1112/93, relativo a la acción ampliación de ejido (cumplimiento de ejecutoria), del poblado "San Juan de Avilés y Puentes", Municipio Aramberri, Estado Nuevo León y se expiden en doce fojas útiles, selladas y cotejadas, para ser enviadas al **Diario Oficial de la Federación**.- Doy fe.- México, D.F., a 18 de mayo de 2005.- Conste.- Rúbrica.